
Nacionalización bancaria y movimiento obrero en México

Javier Aguilar García

1. Contexto histórico de la nacionalización bancaria

Desde una perspectiva global, la nacionalización de la banca y el control de cambios decretado por el Gobierno de José López Portillo son acontecimientos de primer orden en la sociedad contemporánea, particularmente en América Latina. Resultan significativos, en primer lugar, cuando consideramos que los países capitalistas latinoamericanos han sufrido incontables golpes de Estado y padecido regímenes militares durante décadas; en este contexto resulta lógico que los Estados Latinoamericanos no realicen actividades propiamente políticas, es decir actividades encaminadas a ampliar o profundizar el consenso necesario al Estado capitalista; en este sentido, la nacionalización mexicana es una muestra de las decisiones que pueden ejercerse por un régimen político son necesariamente poner en peligro las bases de su estabilidad. En segundo lugar, la nacionalización es un acontecimiento político latinoamericano, en la medida que fue ejercido por el representante de un Estado que está jugando un papel decisivo en la política regional, particularmente al promover una actitud de respeto profundo, institucional, ante las luchas nacionales de Cuba, Nicaragua y Nueva Granada, y frente a las fuerzas populares que combaten en El Salvador y en Guatemala. En tercer lugar las decisiones presidenciales tienen particular trascendencia en la región, por haberse aplicado a uno de los núcleos privados, bancarios y financieros, más fuertes y dinámicos de América Latina.

Son importantes también, porque plantean la posibilidad de reorientar el desarrollo económico, social y político de México; por este conducto la

política mexicana oficial se convierte en un prototipo a seguir para otros países latinoamericanos. Por otra parte, abren la posibilidad de rearticular las alianzas entre los Estados Latinoamericanos. Un enfoque histórico global es indispensable para una reflexión seria y sistemática de los problemas y las perspectivas planteadas por la nacionalización; quienes consideran que estos actos políticos de orden histórico son demagógicos o arbitrarios, o bien superficiales o aparentes, estarán cancelando puntos de referencia para una comprensión cabal del desarrollo de América Latina y para plantear políticas adecuadas a las circunstancias de la región y de México en particular.

Desde una perspectiva nacional, los decretos del 1o. de septiembre de 1982 son acontecimientos constitucionales, producto del ejercicio del poder público y llamados a tener efectos sociales, políticos y económicos de diversa magnitud en los meses y años futuros en el interior del Estado y en el conjunto de la sociedad. El carácter político de la decisión y sus efectos posibles son tan contundentes que establecerán una nueva periodización de la historia mexicana. El año de 1982 quedará en la historia como el fin de un amplio período iniciado en 1940, esto es, como el fin de un modelo de desarrollo social, de crecimiento económico, de desarrollo político.

Por otro lado, la nacionalización bancaria establece la posibilidad de iniciar una nueva etapa en nuestra historia: en términos de desarrollo económico-social, en términos de vida política y en términos de las ideas que acompañan a los procesos sociales. Las posibilidades reales del nuevo período serán visualizadas en los momentos finales del régimen de López Portillo y sobre todo en el punto de partida del Gobierno de Miguel de la Madrid que se inicia

el 1o. de diciembre de 1982. Los planteamientos y la práctica política del nuevo gobierno serán decisivos para conocer el rumbo que tomará la nacionalización bancaria en términos concretos y precisos. Asimismo, serán determinantes en la clarificación del proceso los planteamientos y las prácticas que asuman las fuerzas constitutivas de la llamada sociedad civil; por tanto, será esencial la política que asuman en la transición las organizaciones sociales, desde las obreras, campesinas, populares, hasta las de patronos, industriales, ganaderas, etc. Según las relaciones de estas fuerzas sociales se establecerá la orientación definitiva de la nacionalización. La lucha social es la que impondrá su firma en los procesos derivados del 1o. de septiembre; los resultados de la lucha social, de la política de los partidos, de la conducción del Estado en la transición del país serán claves para definir si realmente iniciamos un nuevo período o no.

2. La política nacionalista del cardenismo

Desde una perspectiva histórico-concreta se ha considerado que la nacionalización bancaria posee una magnitud histórica similar a la que tuvo el acontecimiento estelar que fue la expropiación petrolera de 1938. En efecto, en términos de historia social hay acontecimientos que pueden considerarse similares en la forma o en la magnitud o en la densidad de los hechos. Sin embargo, en la reflexión histórica es necesario tener presente que es muy delicado pretender que sucedan acontecimientos puntualmente semejantes; aceptar esta pretensión es asumir reflexiones alejadas de la historia, es asumir puntos de vista anti-históricos; por tanto la similitud de la nacionalización bancaria con la expropiación petrolera se plantea sólo como una referencia para ilus-

trar el tamaño del acontecimiento. El símil no debe oscurecer las diferencias existentes entre ambos momentos.

El nacionalismo cardenista alcanzó su mayor esplendor con la nacionalización de los ferrocarriles (1936) y la expropiación petrolera (1938). Desde un punto de vista económico, estas medidas significaron el rescate de instrumentos valiosos para alentar y orientar la industrialización; desde un punto de vista político, se deseaba dar impulso al nacionalismo, como el programa de desarrollo que permitiría el progreso nacional y obtener un mayor consenso nacional para el Estado.

Con la política nacionalista se asumían las instituciones públicas como las fuerzas hegemónicas del país. Con el nacionalismo se construyeron y se consolidaron las instituciones públicas; se construyeron y cohesionaron las fuerzas sociales, las fuerzas políticas; la sociedad se integró nacionalmente; el Estado se cohesionó; sociedad y Estado se unificaron y adecuaron organizadamente sus relaciones.

Recuérdese que el nacionalismo constituía un programa de lucha social y política; este programa recogía las principales demandas de las masas; al recoger nítidamente las demandas obreras y campesinas, se establecía una alianza histórica entre las masas y el Estado; alianza que fue sellada precisamente con la política de nacionalizaciones que, al aplicarse en los ferrocarriles y el petróleo, adquirió el carácter de lucha anti-imperialista; de este modo se consolidó la alianza de las clases populares con el Estado, de la clase obrera con el Estado; de este modo se conformó una política de unidad nacionalista frente al acecho de fuerzas extranjeras que no sólo obstruían sino atentaban directamente contra el desarrollo nacional, planteado como el objeto histórico de nuestra Constitución, de nuestra sociedad.

Desde luego, las nacionalizaciones cardenistas modificaron sustancialmente las relaciones de dependencia establecidas entre México y el mundo exterior, entre México y el conjunto del sistema capitalista, sin llegar a romper necesariamente con el propio sistema. Estas nacionalizaciones se dieron en un marco histórico preciso: se aprovecharon las circunstancias previas al estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Con la expropiación petrolera el Estado Mexicano consolidó su propia formación. El acto político de la expropiación le dio una gran autonomía al Estado, una autonomía para conducir a la sociedad que le había otorgado su origen. Igualmente, la expropiación significó un definitivo poder soberano para el Estado; a partir de entonces la soberanía estatal es reconocida por propios y extraños. Con la expropiación, el poder estatal se consolidó gracias al respaldo amplio e irrestricto que le otorgaron las masas obreras y campesinas, los profesionales, los militares, los burócratas, e incluso los empresarios nacionalistas. Cuando las clases y grupos fundamentales del país avalaron la política nacionalista avalaron también el poder del régimen, el poder del Estado.

La política nacionalista y particularmente la expropiación petrolera fueron la culminación del cardenismo. La sociedad se unificó. El Estado se fortaleció. Sociedad y Estado se identificaron. Había condiciones sociales, políticas y económicas capaces de iniciar un nuevo período histórico: el período del desarrollo, del mundo moderno, de la industrialización; en adelante, el eje de la actividad nacional sería precisamente la industrialización; había todas las condiciones necesarias para impulsar el cumplimiento de un objetivo, el de la revolución mexicana de 1910-1917, firmemente cimentado en la

política de reformas ejercidas por el Cardenismo; asimismo existían las condiciones creadas por inminencia de la Segunda Guerra Mundial.

De 1933 a marzo de 1938 el Cardenismo ya se había desplegado sobre la nación. Los obreros, los campesinos, los burócratas, los militares, los empresarios, todos los grupos y clases fundamentales se habían organizado. Se había destruido el poder económico de los terratenientes. Se había golpeado a los grupos políticos tradicionales que pretendían ejercer un poder personal y se oponían al poder institucional. Se había redistribuido la riqueza y ampliado el mercado interno. A principios de 1938 se había cumplido en lo esencial el programa de reformas planteadas por la constitución; la sociedad civil se había organizado; el Estado asumía su autonomía, asumía igualmente su capacidad de dirección política de la sociedad.

En marzo de 1938 la política de masas culminó con dos procesos paralelos y mutuamente determinantes: la creación del Partido de la Revolución Mexicana y la Expropiación Petrolera. La organización del partido implicaba institucionalizar el apoyo de las masas al régimen, al Estado Mexicano. La expropiación implicaba ejercer un poder soberano, el poder del Estado; implicaba la cohesión nacional de la sociedad; implicaba la unidad histórica de la sociedad y el Estado, de las clases sociales y el Estado; implicaba concluir un período de movilizaciones iniciado en 1935 y poner fin el período formativo del Estado; la expropiación constituyó el punto más alto de la política de masas y el broche de oro en la formación del Estado. En adelante, el Estado mexicano será inconcebible sin nacionalismo y sin política de masas; en mayor o menor medida serán mecanismos fundamentales de su poder.

3. El desarrollo industrial y la clase obrera mexicana

Desde 1940 el desarrollo del capitalismo mexicano se logró en gran parte a partir de las bases sociales, políticas y económicas creadas o consolidadas en el cardenismo. De 1940 a 1970 la sociedad mexicana transitó por un crecimiento capitalista amplio y definitivo; las transformaciones estructurales se tradujeron en un fortalecimiento de las clases sociales; por otro lado, se vivió un período de calma política tan notable que México es reconocido por propios y extraños como uno de los países más estables de América Latina en los últimos cuarenta años. A riesgo de exagerar, podemos señalar que los gobernantes mexicanos de 1940 en adelante recogieron y aprovecharon los frutos económicos, sociales, políticos e ideológicos de los procesos y las decisiones cumbres vividos durante el cardenismo, y particularmente de las decisiones y procesos vinculados al nacionalismo.

La alianza histórica de la clase obrera con el Estado se mantuvo inalterable de 1940 a 1970. Fueron tres décadas en que las instituciones económicas y políticas se constituyeron en aparatos poderosos del desarrollo. La disidencia sindical también estuvo presente en esos lustros; se presentó en sectores específicos de la clase; los sindicatos nacionales de petroleros, ferrocarrileros, mineros, desempeñaron movimientos sociales encaminados a conquistar la democracia y la autonomía respecto al Estado; la espectacularidad de sus luchas y las fuerzas que aglutinaron no fueron suficientes para desarticular el sistema sindical oficial.

La izquierda mexicana fue desarticulada y desplazada del seno de las organizaciones obreras, particularmente de la CTM. Sin embargo, su presencia

fue notable en las diversas luchas de los años cuarenta y cincuenta, encaminadas a conquistar la democracia y la autonomía: en el sindicato ferrocarrilero, en mineros, en electricistas, en los maestros de primaria del Distrito Federal, etc.

Durante 1970-1982, el capitalismo mexicano ha manifestado graves problemas de producción económica, problemas de orden político y social que apuntan a la necesidad de transformaciones capaces de mantener y ampliar al sistema dominante en México. Durante los setenta, y especialmente en 1982, se hace evidente que el esquema de desarrollo capitalista practicado durante cuarenta años en México enfrenta serios obstáculos para mantenerse como tal, a la vista de las condiciones internas y de las condiciones generales del mundo capitalista.

En 1982 es claro que se han modificado en gran medida las bases económicas, sociales y políticas que facilitaron el desarrollo en las últimas décadas.

A riesgo de que parezca exagerado, es posible señalar que la nacionalización de la banca y el control generalizado de cambios constituyen decisiones que están en posibilidad de impulsar procesos sociales de gran magnitud en la vida económica, política e ideológica de nuestro país. Son acontecimientos que reviven el nacionalismo y el programa de la Revolución Mexicana contenido en la Constitución Política del país; son decisiones que rescatan la autonomía del Estado Mexicano; son decisiones y procesos que rearticulan las alianzas de las clases sociales, las alianzas entre las clases y el Estado; son acontecimientos que pueden ser base de un nuevo esquema del capitalismo mexicano; en este sentido es posible indicar que los gobernantes que sucedan a López Portillo tienen la posibilidad de aprovechar los frutos que se desprenden de la nacionalización

recién efectuada; tienen la posibilidad histórica de reorientar el desarrollo para favorecer los procesos y las clases que recibieron menos beneficios de 1940 a 1982; si la oportunidad histórica se utiliza una vez más para favorecer a las clases ya beneficiadas durante cuatro décadas, el capitalismo y el Estado mexicano estarán suprimiendo quizá la última oportunidad que poseen para garantizar la estabilidad social y política.

4. El movimiento obrero, la izquierda y la nacionalización

De 1970 a 1982 la clase obrera en su conjunto ha vivido uno de los períodos más agitados. Multitud de sindicatos han experimentado cambios; las huelgas estalladas en el período no tienen comparación con ninguna década anterior; la clase obrera se convirtió en un personaje decisivo de la vida política y social de México. En gran parte de los movimientos se manifestó desconfianza hacia el sistema sindical encabezado por la CTM; de tal magnitud fueron los descontentos y los descalabros que la CTM ha optado en los últimos años por transformar paulatinamente su programa de acción política y sindical; en 1978 el proyecto cetemista de Reforma Económica recogió una serie de demandas que durante décadas habían sido planteadas sólo por la izquierda; en aquel proyecto se incluía la nacionalización de la banca; hoy este proyecto se ha puesto en marcha, por tanto es de suponer que la CTM está obligada a defenderlo en todos los terrenos.

La nacionalización bancaria tiene varios efectos políticos. Por un lado rescata la autoridad del Estado como conductor de la política económica; de este modo se recupera y profundiza la autonomía propia del Estado. Por otro lado, la autoridad

estatal se amplía ante las clases populares, clases que por lo mismo otorgan un gran consenso social al Estado.

En particular, la clase obrera muestra el papel complejo que desempeña en el sistema social y político de México. Ante la nacionalización bancaria la clase obrera organizada ha manifestado apoyo a la medida; desde los sindicatos pertenecientes al sistema oficial hasta los sindicatos considerados independientes o democráticos han reconocido las virtudes de la decisión y los posibles efectos sociales y políticos; desde este contexto global las organizaciones diversas de la clase obrera han manifestado interés en participar directamente en la orientación que seguirá al proceso de la nacionalización; de este modo, la clase obrera está mostrando que tiene experiencia, que tiene proyectos y que plantea puntos de vista autónomos respecto a una decisión del régimen; en este contexto es preciso reconocer que las organizaciones oficiales y las organizaciones democráticas no integradas al sistema sindical tienen hoy condiciones propicias para desarrollar una política autónoma. La defensa de la nacionalización bancaria puede conceder una autonomía amplia a los sindicatos oficiales e igualmente una mayor perspectiva a las organizaciones obreras que pugnan por ampliar la democracia en el sistema sindical y político mexicano.

La CTM y los sindicatos independientes poseen razones propias para ejercer una defensa adecuada de la nacionalización y en la medida en que lo hagan tendrán mayor fuerza; por el contrario, si no hay defensa ni una propuesta acerca de cómo aprovechar la nacionalización, las organizaciones obreras se debilitarán en un sentido político.

La CTM, para conservar su posición de liderazgo, tendrá que pugnar porque la nacionalización

bancaria y sus efectos se orienten efectivamente a promover un desarrollo democrático y popular que beneficie a los grupos y clases que han sido olvidados durante décadas: obreros, campesinos, trabajadores de campo y ciudad, etc. Por el contrario, si pretende que estas clases continúen sacrificándose estará perdiendo la visión histórica de la sociedad y su papel de liderazgo.

En el mismo sentido, si el Estado mexicano en los próximos meses no acepta la necesidad de reorientar el desarrollo dentro del capitalismo para beneficiar a las grandes mayorías, estará atentando contra las bases más fuertes de su poder: la adhesión popular, la adhesión de las grandes masas; estará deteriorando su poder.

A riesgo de exagerar, podemos indicar que el régimen mexicano se encuentra ante la última oportunidad de iniciar procesos que alarguen la vida del sistema político más fuerte de América Latina; si desaprovecha la oportunidad el turno histórico será de la clase obrera y demás clases explotadas, no para alargar la vida política y económica del capitalismo en México, sino para plantear el establecimiento y organización del nuevo sistema: el socialismo.

Por último algunas consideraciones sobre la izquierda. De 1970 a 1982 la izquierda mexicana ha crecido, ha madurado, ha ampliado su presencia en la vida política nacional; poco a poco se ha venido integrando a los movimientos sociales, urbanos y agrarios; particularmente ha cobrado presencia en los sindicatos, con tendencia a obtener mayores espacios sociales y políticos; parece claro que con un programa firme y adecuado, con una organización amplia y combativa, la izquierda está en posibilidades de obtener numerosos frutos a partir de la nueva situación.

En los últimos años la izquierda mexicana, a través de sus distintos agrupamientos, ha estado presente en las luchas por implantar la democracia sindical, en las luchas por mejorar las condiciones de vida y de trabajo de numerosos sindicatos, en las luchas por conquistar la independencia frente al sistema, así como en los movimientos de apoyo a las luchas campesinas, las luchas urbanas, etc. En movimientos nacionales como en los movimientos de solidaridad con las luchas populares de Nicaragua, de El Salvador, etc., la izquierda mexicana ha madurado.

En los últimos dos sexenios, como en décadas anteriores, la izquierda había planteado la necesidad de nacionalizar la banca y de orientarla al servicio de las clases populares; este objetivo se ha cumplido en parte con los decretos del 10. de septiembre; en adelante es necesario precisarlo en sus términos y transformarlo en procesos políticos, económicos, ideológicos; en este sentido la izquierda puede desempeñar un papel central señalando la posible orientación del proceso, así como los límites y problemas que conlleva; proponiendo los posibles pasos a seguir por parte de la propia izquierda, de los sindicatos, del conjunto de las organizaciones sociales; a su vez, la izquierda tendrá que escuchar y asimilar los planteamientos expresados por las agrupaciones sociales.

Por el momento sólo es posible indicar el rumbo que está tomando la discusión sobre la nacionalización bancaria. Numerosas agrupaciones sociales, en particular destacados sindicatos y diversas

organizaciones políticas, militantes de la izquierda, etc., han formulado aspectos centrales como los siguientes: apoyar el proceso de nacionalización bancaria, pero no incondicionalmente como sucedió durante la experiencia del petróleo; pugnar porque las organizaciones obreras defiendan la nacionalización bancaria sin hipotecar los intereses inmediatos o los históricos; impulsar movimientos para la defensa de las demandas inmediatas y la nacionalización; plantear la unidad de acción de las diversas organizaciones obreras; promover la construcción de un movimiento obrero autónomo; impulsar la unidad de la clase obrera con las demás clases explotadas, con el objetivo de construir un gran bloque social e histórico.

Por último es necesario reconocer la diversidad de opiniones sobre la nacionalización. Para una gran corriente de organizaciones sindicales y políticas la nacionalización bancaria presenta posibilidades de impulsar un desarrollo popular-democrático de la sociedad. Para otra gran corriente, la nacionalización bancaria no implica necesariamente un avance social o económico, no implica posibilidades de desarrollo popular. Entre estas dos opciones se han manifestado de modo inicial los diversos agrupamientos de la izquierda, los diversos sindicatos y los intelectuales. El sentido y la concreción definitiva que adquiera la nacionalización bancaria serán determinantes para el rumbo que tome la sociedad mexicana. El desenvolvimiento histórico de México depende finalmente del papel que asuman las respectivas organizaciones sociales de las clases. 